

paz de Mérida, pronunciada en 21 de Agosto próximo pasado en el juicio sobre desocupación de casa seguido contra la misma señora Guzman por el C. Manuel Dondé Cámara.

Devuélvanse sus actuaciones al juez de Distrito de Yucatan con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre veinte y tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por los Sres. F. de la Vega y C<sup>as</sup>, contra el tesorero general del Estado, que les exige trece pesos doce centavos, por derecho de mercado, correspondiente á veintium bultos de mercancías nacionalizadas en Guaymas que importó el vapor "Colon," por creer los quejosos que se viola con esta providencia la fracción 1<sup>a</sup> del art. 112 de la Constitución federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Los Sres. Fortunato de la Vega y C<sup>as</sup> de este comercio, han ocurrido solicitando amparo contra la providencia del C. teso-

rero general del Estado, en virtud de la que se les cobran trece pesos y centavos por derecho de mercado, causado por la introducción de algunos bultos de efectos nacionalizados procedentes de Guaymas.

Esto caso es idéntico al que tuvo lugar en el amparo solicitado por la misma casa contra la tesorería del Estado que les exigió el pago de doscientos treinta y dos pesos cincuenta centavos por derecho de mercado, correspondiendo á 265 bultos de mercancías nacionalizadas: en aquel, ya el juzgado de su digno cargo y despues la Suprema Corte de Justicia, han resuelto que debía ampararse, como en efecto se amparó por la justicia de la Union á los solicitantes. Hoy pues, es inútil entrar al exámen de la presente solicitud, y el parecer de el que suscribe es que, por los mismos fundamentos y consideraciones que motivaron la suprema ejecutoria de 25 de Julio del corriente año, ese juzgado se sirva amparar á los Sres. Fortunato de la Vega y C<sup>as</sup>, por el pago de trece pesos doce centavos que les exige la tesorería general del Estado.

Mazatlan, Setiembre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*L. Gaona*.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Mazatlan, Setiembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: los Sres. F. de la Vega y C<sup>as</sup>, de este comercio, promueven juicio de amparo contra la providencia del C. tesorero general del Estado por la que se les exigen (\$ 13 12 cs.) trece pesos doce centavos valor del impuesto llamado de mercado, que deben satisfacer por los bultos de mercancías que nacionalizados en Guaymas les han venido á este puerto en el pailebot nacional "Colon," diciendo los quejosos que con tal providencia se quebranta la fracción 1<sup>a</sup> del art. 112 de la Constitución general, y por consiguiente se invaden facultades

propias de la autoridad federal. Pasada la correspondiente copia del ocurno, al C. tesorero general del Estado para que informara con justificacion, al rendir su informe, no niega el hecho, y solo dice que dió orden para el cobro de que se quejan los señores F. de la Vega y C<sup>a</sup> en cumplimiento al decreto del gobierno del Estado fecha 11 de Enero de 1870 y de la ley núm. 136 expedida por la lagislatura del mismo para hacer la clasificacion de sus rentas, cuyas leyes extablecen tal impuesto. En seguida se pasó el expediente al C. Promotor fiscal, quien en su pedido de 18 del presente dice, que siendo idéntico este caso al que tuvo lugar el amparo solicitado por la misma casa cuando se los exigieron (§ 232. 50 es.) doscientos treinta y dos pesos cincuenta centavos por derecho de mercado correspondiente á 265 bultos que le vinieron de Guaymas ya nacionalizados, y habiendo sido confirmado dicho amparo por la Suprema Corte de Justicia en su ejecutoria de 25 de Julio último, debian ser tambien hoy amparados contra la providencia por la que les exige la suma (§ 13 12 es.) trece pesos doce centavos. Con estos trámites se dieron por conclusos los autos, quedando tambien citadas las partes para sentencia; y

Considerando: que el derecho de mercado que establecen las citadas disposiciones legislativas, es verdaderamente un impuesto sobre importacion el que está prohibido á la Legislatura de los Estados establecer, segun la fraccion 1<sup>a</sup> del artículo 912 de la Constitucion general, la que deben siempre respetar aquellas, no obstante la libertad que tienen de dictar leyes para su régimen interior, por que conforme al 41 del mismo Código, en ningun caso pueden contravenir á las estipulaciones del pacto federal.

Considerando: así mismo, que los tribunales de la federacion están facultados para resolver toda contraversia que se suscite por leyes ó actos que invadan la esfera de la autoridad federal, en cuyo caso se halla

el presente juicio, por tratarse en él de resolver, si las leyes contra las que se pide amparo atacan ó no á las facultades de la autoridad federal.

Considerando por último: que al quebrantarse por la Legislatura del Estado la citada fraccion del artículo constitucional, se comete una espresa violacion de la garantia que aquella otorga, y por lo mismo los quejosos están en el caso de ser amparados. Por estas razones y teniendo á la vista la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia fecha 25 de Julio último á que se refiere el C. Promotor fiscal, con cuyo parecer es conforme este juzgado, se resuelve.

Primero: la justicia federal ampara y protege á los señores F. de la Vega y compañía contra la providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga á pagar (§ 13 12 es.) trece pesos doce centavos por derechos de mercado correspondiente á 21 bultos de efectos extranjeros nacionalizados en Guaymas y que importó á este puerto el paleibot nacional "Colon."

Segundo: notifíquese esta sentencia á las partes, y sacándose dos copias de ella, una para que sea publicada en el periódico oficial y la otra para el Semanario Judicial, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.—*Pedro S. Bermudez.*—A.—*Prisciliano S. Iturrios.*—A.—*Ramon Lizárraga.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por los señores F. de la Vega y compañía contra el tesorero general del Estado, quien en virtud del decreto del gobierno del mis-

mo de 31 de Enero de 1870, los exige el pago de trece pesos doce centavos por derecho de mercado correspondiente á veintiun bultos de mercancías nacionalizadas en Guaymas, que importó el pailebot nacional "Colon," y consignados á los promoventes, quienes alegan que con tal acto se ataca por dicho tesorero la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion general; invadiendo por consiguiente facultades propias solo de la autoridad federal.

Visto el parecer fiscal y las demas constancias de autos.

Considerando: que aun cuando los Estados de la federacion en uso de su soberanía, puedan dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las prescripciones constitucionales; y que en el presente caso, el gobierno de Sinaloa al expedir su decreto de 31 de Enero de 1870, imponiendo un derecho llamado de mercado á los efectos nacionalizados en otros Estados al introducirse al de Sinaloa, sin permiso del Congreso general, ha hecho una violacion expresa de las garantías consignadas por los peticionarios; se decreta: que por sus prolegales fundamentos es de confirmarse y se confirma el fallo del juez de Distrito de Sinaloa que, en nombre de los poderes de la Union declara: que la justicia federal ampara y protege á los señores F. de la Vega y compañía contra la providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga á pagar trece pesos doce centavos por derechos de mercado, correspondiente á veintiun bultos de efectos extranjeros nacionalizados en Guaymas y que importó á ese puerto el pailebot nacional "Colon"

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron al tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*

—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*  
—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre veintitres de mil ochocientos setenta y uno. *Lic. Agustín Peralta.* Oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan por Tiburcio Mejía, contra el procedimiento del C. prefecto de Tacámbaro, por violacion de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

D. Tiburcio Mejía se queja á ese juzgado de que estando preso en la cárcel de Tacámbaro, á disposicion del juez de 1ª instancia del mismo lugar, quien le instruye una causa por heridas, se le remitió violentamente á la cárcel de esta ciudad sin dárselo á conocer el motivo que determinó tal providencia, que en concepto del quejoso no puede ser otro sino un nuevo delito que se le atribuye, y en tal supuesto cree violada la garantía que estableció el art. 19 de la Constitucion general en su primera parte, puesto que no se le ha notificado el auto motivado de prision, sin embargo de haber trascurrido los tres dias que es el término mayor que puede durar la detencion, ó una medida dictada por vía de seguridad de cárcel, y en tal caso considera violadas las garantías que otorga la parte final del mismo art. 19, las fracciones 3ª y 4ª del 20 y la 1ª del 21, y en consecuencia pide que la justicia federal lo ampare en el goce de las garantías que respectivamente se hayan violado, segun que la causa que determinó el cambio de cárcel sea